

S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 74
O R D I N A R I A
JUEVES 2 DE JULIO DE 2009

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cuarenta minutos del jueves dos de julio de dos mil nueve, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar Sesión Pública Ordinaria, los señores Ministros Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Mariano Azuela Güitrón, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

APROBACIÓN DE ACTA

Proyecto del acta relativa a la Sesión Pública número Setenta y tres, Ordinaria, celebrada el martes treinta de junio de dos mil nueve.

Por unanimidad de once votos el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Ordinaria Tres de dos mil nueve:

XI.- 88/2008

Controversia constitucional número 88/2008, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la propia entidad, demandando la invalidez del Decreto 824 publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciséis de julio de dos mil ocho que reformó la Constitución Política de la entidad. En el proyecto formulado por el señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo se propuso: *“PRIMERO.- Es procedente y parcialmente fundada la presente controversia constitucional, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos. SEGUNDO.- Se sobresee en la presente controversia constitucional por lo que hace al Decreto 889, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el veintitrés de julio de dos mil ocho, en términos de lo expresado en el considerando quinto de esta ejecutoria. TERCERO.- Se desestima la controversia constitucional por lo que hace a la publicación del Decreto 824, así como las fe de erratas combatidas en la primera y segunda ampliación de demanda, al tenor de lo expresado en la primera parte del considerando séptimo de esta ejecutoria. CUARTO.- Se declara la invalidez de los artículos 92, párrafo quinto, de la Constitución Estado de Morelos, así como de los artículos tercero, quinto, sexto y séptimo transitorios, del combatido Decreto 824, publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciséis de julio de dos mil ocho; de igual modo, se declara la invalidez de las dos convocatorias emitidas por la Junta*

Sesión Pública Núm. 74

Jueves 2 de julio de 2009

Política y de Gobierno del Congreso del Estado, y requerimiento de seis de octubre de dos mil ocho, impugnados en la tercera y quinta ampliación de demanda. QUINTO.- Con exclusión de los anteriores preceptos, se reconoce la validez del Decreto 824, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciséis de julio de dos mil ocho; así como del Decreto 938, publicado en el mismo periódico el quince de octubre de dos mil ocho y los Decretos 994, 997, 998, 999, 1000 y 1003, publicados el doce de noviembre siguiente. SEXTO.- Esta sentencia surtirá sus efectos en el plazo y en los términos precisados en el último considerando de este fallo. SÉPTIMO.- Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Morelos y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia manifestó que en la sesión previa a la pública se discutió la forma en la cual se abordaría el presente asunto.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia solicitó al secretario general de acuerdos precisar el resultado de las votaciones realizadas respecto de este asunto en las sesiones en las que anteriormente se analizó. Ante ello el secretario general de acuerdos informó que en las sesiones

celebradas el veintiocho de mayo y el dos de junio se llegó a los siguientes acuerdos:

En relación con los Considerandos Primero, competencia; Segundo, oportunidad de la presentación de la demanda y sus ampliaciones; Tercero, legitimación activa; Cuarto, legitimación pasiva; Quinto, causas de improcedencia; y sexto, relación de todos los actos impugnados, los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Azuela Güitrón, Sánchez Cordero de García Villegas, Silva Meza y Presidente Ortiz Mayagoitia manifestaron su unánime conformidad con la propuesta.

Por mayoría de siete votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Gudiño Pelayo, Azuela Güitrón, Sánchez Cordero de García Villegas y Silva Meza se aprobó la propuesta contenida en el punto resolutivo Segundo de declarar la invalidez del Decreto 824 del Poder Legislativo del Estado de Morelos, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el día dieciséis de julio de dos mil ocho, por no cumplir con el requisito formal de promulgación; los señores Ministros Franco González Salas, Góngora Pimentel, Valls Hernández y Presidente Ortiz Mayagoitia votaron en contra; los señores Ministros de la mayoría manifestaron que las

consideraciones del proyecto del señor Ministro Gudiño Pelayo en su oportunidad constituirán voto de minoría.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia manifestó que al no obtener la votación calificada de ocho votos la declaración de invalidez del procedimiento legislativo del decreto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y párrafo segundo del artículo 42 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional, se desestimó la controversia constitucional respecto del procedimiento legislativo relativo al Decreto 824 del Poder Legislativo del Estado de Morelos, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el día dieciséis de julio de dos mil ocho.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia precisó que las votaciones que se obtuvieran en relación con el presente asunto, serían definitivas. A continuación sometió a la estimación del Tribunal Pleno el proyecto de resolución modificado.

El señor Ministro Gudiño Pelayo recordó los antecedentes de este asunto y precisó los diez temas en los cuales se han agrupado los diversos conceptos de invalidez planteados en la demanda, a saber: 1. Competencia del

Congreso del Estado para expedir el combatido Decreto 824 de Reformas a la Constitución del Estado de Morelos; 2. Violación al principio de división de poderes derivada de la nueva conformación del Consejo de la Judicatura; 3. Posibilidad de remoción de los representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en el Consejo de la Judicatura; 4. Conformación temporal del Consejo de la Judicatura por seis miembros; 5. Violación al principio de división de poderes derivada de la nueva forma de designación de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; 6. Convocatorias y designación de Magistrados, conforme al nuevo esquema previsto en la reforma constitucional combatida; 7. Retroactividad de la reforma constitucional en lo que respecta a los ya nombrados Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 8. Nueva conformación del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, en relación con sus actuales integrantes; 9. Mandato para que el Tribunal Superior de Justicia presente iniciativa a fin de adecuar la ley a la reforma constitucional controvertida, y 10. Haber de retiro y pensión previstos en el artículo octavo transitorio, retroactividad y violación al principio de independencia judicial.

La señora Ministra Luna Ramos propuso abordar previamente la propuesta contenida en las páginas de la ciento sesenta y siete a la ciento setenta y cuatro del proyecto en la cual se propone sobreseer en el juicio por cesación de efectos respecto del artículo 50 de la Ley

Orgánica del Congreso del Estado de Morelos al haberse modificado mediante Decreto de once de febrero de dos mil nueve.

Al respecto, indicó que en el expediente existen acreditados diversos actos de aplicación del precepto reformado, a saber, las convocatorias del veintisiete de agosto y doce de noviembre de dos mil ocho para la designación de Magistrados.

Además, consideró que aun cuando en las convocatorias no se haya citado expresamente el respectivo numeral lo cierto es que sí se aplicó implícitamente.

El señor Ministro Gudiño Pelayo mencionó que en su caso estaría a lo que determine el Pleno y de ser necesario distribuiría para la siguiente sesión el alcance del referido tema que mientras tanto podría quedar pendiente.

El señor Ministro Valls Hernández señaló que al no existir efectos retroactivos en el fallo no es necesario analizar la constitucionalidad de la norma.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia precisó que se impugna la constitucionalidad de la ley y, como consecuencia, la del acto de aplicación al que da fundamento.

Sesión Pública Núm. 74

Jueves 2 de julio de 2009

La señora Ministra Luna Ramos aclaró que efectivamente debía analizarse al existir un acto de aplicación, toda vez que el artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prevé que las leyes en controversia se pueden impugnar a partir de su entrada en vigor o a partir de que tienen conocimiento del acto de aplicación, por lo que por unanimidad de votos se determinó que no se actualiza la respectiva causa de improcedencia.

El señor Ministro Valls Hernández retiró su objeción.

A continuación, el señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia sometió a votación las consideraciones contenidas en el proyecto para sustentar la desestimación determinada por el Pleno de este Alto Tribunal en su sesión del dos de junio del año en curso, indicando que para tal fin basta con señalar que no se alcanzó la votación calificada requerida.

El señor Ministro Góngora Pimentel estimó que debería agregarse al engrose lo manifestado por el señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia.

El señor Ministro Aguirre Anguiano manifestó que dicha consideración se encontraba en la página doscientos noventa y tres, penúltimo párrafo.

Sesión Pública Núm. 74

Jueves 2 de julio de 2009

El señor Ministro Azuela Güitrón solicitó que en el engrose se agreguen los motivos de la desestimación para no fundarla únicamente en que no se contó con la votación necesaria.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia sostuvo que la tesis sustentada en la discusión posterior versa sobre el hecho de que se cuente con votación insuficiente para alcanzar la inconstitucionalidad únicamente respecto de un concepto de invalidez, lo que debe desestimar el concepto de invalidez y no la acción, de manera que debería de agregarse al considerando respectivo.

El señor Ministro Franco González Salas precisó que es necesario únicamente agregar al engrose las consideraciones relativas a que la desestimación opera respecto del concepto de invalidez respectivo.

Puesta a votación económica la propuesta de desestimar la controversia constitucional por lo que se refiere al planteamiento de invalidez del procedimiento legislativo del decreto impugnado, se aprobó por unanimidad de votos de los señores Ministros.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia sometió a la estimación del Tribunal Pleno el Considerando Séptimo “II. Competencia del Congreso del Estado para expedir el combatido Decreto 824 de reformas a la Constitución del

Sesión Pública Núm. 74

Jueves 2 de julio de 2009

Estado de Morelos”, (páginas de la doscientos noventa y cuatro a la doscientos noventa y ocho), en el que se determina que es infundado el planteamiento sobre la incompetencia del Congreso del Estado de Morelos para presentar iniciativas en materia de administración de justicia, como la contenida en el combatido decreto 824, ya que la facultad de legislar en esa materia, según se explicó, no está condicionada a una iniciativa proveniente, en exclusiva, del Tribunal Superior de Justicia.

El señor Ministro Gudiño Pelayo precisó los argumentos que sustentan la propuesta relativa, la que en votación económica se aprobó por unanimidad de votos. El señor Ministro Azuela Güitrón solicitó se redacte la tesis respectiva.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia sometió a la estimación del Tribunal Pleno el Considerando Séptimo “III. Violación al principio de división de poderes, derivada de nueva conformación del Consejo de la Judicatura” (páginas de la doscientos noventa y ocho a la trescientos veintinueve), en el que se estima que al ser infundados los conceptos de invalidez analizados los numerales impugnados 40, fracción XXXV y 92, no vulneran el principio de división de poderes.

El señor Ministro Gudiño Pelayo precisó las consideraciones que sustentan la propuesta del proyecto en

cuanto a reconocer la validez de dichos preceptos, manifestando que no se advierte que pueda haber una influencia del Poder Legislativo hacia los miembros del Consejo de la Judicatura de la entidad, por lo que la designación de los Consejeros no compromete el funcionamiento del Poder Judicial.

El señor Ministro Cossío Díaz sugirió analizar conjuntamente los temas tres y cuatro, por su estrecha relación, siendo conveniente que la declaración de invalidez prevista en el cuarto tema se sustente con el mismo detalle sobre los grados de intromisión y subordinación. Agregó su conformidad con la declaración de invalidez del párrafo quinto del artículo 92 de la Constitución local al permitir la libre remoción de los Consejeros designados por los Poderes Legislativo y Ejecutivo, lo que genera un problema de subordinación.

El señor Ministro Valls Hernández se manifestó a favor del proyecto y sugirió que en el presente asunto se retomen las consideraciones sostenidas por el Pleno al resolver la controversia constitucional 32/2007. Incluso, propuso incluir en el estudio respectivo al representante del Ejecutivo en el Consejo de la Judicatura del Estado, debiendo analizarse la validez de la norma impugnada atendiendo al conjunto de todos los integrantes del referido Consejo, pues lo relevante es si su conformación da o no lugar a que uno de los Poderes del Estado tenga por sí solo o en unión de otro

Sesión Pública Núm. 74

Jueves 2 de julio de 2009

atribuciones que puedan poner en riesgo los principios de autonomía e independencia del Poder Judicial.

Además, recordó que los representantes del Poder Judicial del Estado son mayoría en el Consejo respectivo, por lo cual no existen atentados en contra de los principios constitucionales de no intromisión, no dependencia y no subordinación, de donde se sigue que los Consejeros ejercerán su función con independencia e imparcialidad, pues los dos integrantes de otros Poderes no pueden alcanzar la votación para prevalecer sobre la de los representantes del citado Poder.

El señor Ministro Azuela Güitrón mencionó que se trata de diversos temas relacionados con el mismo problema, estimando conveniente recalcar que existe una contradicción en el artículo 92 impugnado ya que en un momento se indica que los Consejeros designados por los Poderes Ejecutivo y Legislativo no serán representantes de éstos y posteriormente se precisa en su párrafo quinto que podrán ser removidos libremente, siendo relevante el pronunciamiento relativo a que los titulares de los Consejos de la Judicatura Locales no son representantes de quien los designa.

El señor Ministro Valls Hernández precisó que no pretendió sostener que los Consejeros son representantes de quien los designó.

El señor Ministro Góngora Pimentel señaló compartir el sentido del proyecto y agregó que a partir de que una persona forma parte del Consejo de la Judicatura local, cambia su estructura intelectual y emocional para encaminarse a ejercer su función de manera independiente e imparcial, no obstante el origen de su designación.

Además, indicó que el problema se presenta porque el artículo 92 de la Constitución del Estado de Morelos, en su párrafo quinto, considera como representantes a los respectivos Consejeros y, además, permite su libre remoción, lo que estimó inconstitucional tal como lo propone el proyecto, ya que la naturaleza de las funciones de éstos exige que actúen con plena autonomía e independencia.

La señora Ministra Luna Ramos manifestó coincidir con el proyecto y estar de acuerdo con que se estudien de manera conjunta los puntos 3 y 4, así como que se haga referencia al precedente del Estado de Baja California. Incluso, consideró que lo previsto en el artículo 92, párrafo quinto, de la Constitución del Estado de Morelos, sí es inconstitucional.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia solicitó al Pleno que para efectos de la votación se distinga entre los temas originales 3 y 4 sin menoscabo de que en el engrose el estudio se aborde en conjunto.

El señor Ministro Silva Meza manifestó la conveniencia de precisar que los Consejeros de la Judicatura no son representantes del Poder que los designa y deben actuar con plena autonomía e independencia, destacando que en el caso concreto la norma impugnada sí es inconstitucional al designar a los Consejeros de la Judicatura del Estado de Morelos como representantes.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas agregó que en el artículo 100 de la Constitución General de la República se precisa adecuadamente que los Consejeros no son representantes de quien los designa.

El señor Ministro Valls Hernández sugirió al señor Ministro Gudiño Pelayo ajustar el proyecto para hacer referencia al artículo 17 constitucional con la finalidad de adecuarlo a lo resuelto en la controversia constitucional 32/2007.

El señor Ministro Aguirre Anguiano se manifestó a favor del proyecto y propuso considerar que la norma impugnada viola diversos preceptos constitucionales, para lo cual recordó que en términos de lo previsto en el artículo 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 constitucional este Alto Tribunal puede suplir la deficiencia de la queja e introducir la violación a preceptos constitucionales no señalados en la demanda.

En ese contexto señaló que si un Estado introduce en su Constitución un Consejo de la Judicatura debe estar a los principios establecidos en el artículo 100 constitucional, siendo que en el caso concreto se vulneran aquéllos.

También estimó que la normativa impugnada afecta el derecho a ser juzgado por tribunales independientes garantizado en el artículo 17 constitucional, sugiriendo al ponente aprovechar lo anterior.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia señaló que podrían agregarse dichos argumentos, ante lo cual el señor Ministro Gudiño Pelayo manifestó que efectivamente en el sistema constitucional del Estado Mexicano la independencia de los jueces está determinada también por la del Consejo de la Judicatura que los apoye en funciones administrativas.

Además, precisó que la declaración de invalidez podría incluir las porciones normativas del párrafo segundo del artículo 92 constitucional que indican “representante”.

El señor Ministro Franco González Salas se manifestó a favor del proyecto; sin embargo, las intervenciones anteriores lo llevaron a precisar dos situaciones: la primera, respecto a que independientemente a que exista o no tesis al respecto, si los proyectos fueron aprobados en su

momento por ocho votos, sus consideraciones son obligatorias y, consecuentemente, aplicables; y la segunda, que se mantendría atento a la forma en la que el señor Ministro ponente redacte el engrose, ya que se debe establecer claramente el alcance del artículo 17 constitucional en relación con los Consejos de la Judicatura, pues está focalizado a los tribunales, y no se debería dar la impresión de que se les está otorgando un tratamiento similar, de manera que manifestó que respetando la decisión que tomara el Pleno en relación con dicho tema, de no estar de acuerdo con esta parte, elaboraría un voto concurrente.

El señor Ministro Azuela Güitrón estimó que la norma impugnada también vulnera lo previsto en el artículo 116, fracción III, párrafo segundo, constitucional, ya que si esta Norma Fundamental únicamente regula al Consejo de la Judicatura Federal, ello implica que los Consejos Locales deben adoptar el modelo previsto en la Constitución General respecto de aquel Consejo, siendo necesario que los Consejos Locales no se rijan por un sistema que al afectar la independencia e imparcialidad de sus integrantes, pueda eliminar la independencia e imparcialidad de los Magistrados y Jueces Locales, precisando las complicaciones que en los hechos pueden suceder ante normas como la impugnada, que ponen en riesgo dichos principios, solicitando al señor Ministro Gudiño Pelayo agregar dichas consideraciones.

El señor Ministro Cossío Díaz indicó que en el proyecto se desarrolla la respectiva declaración de invalidez atendiendo a una violación al principio de división de poderes, precisando que el artículo 86 de la Constitución local señala: “El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en el Tribunal Estatal Electoral, en el Contencioso Administrativo, y en el Unitario de Justicia para Adolescentes, cada uno en el ámbito de sus respectivas competencias”, en tanto que el diverso artículo 92 en su primer párrafo prevé: “El Consejo de la Judicatura Estatal es un órgano del Poder Judicial del Estado de Morelos, con independencia técnica de gestión, y para emitir sus resoluciones a las cuales deberá dar publicidad y transparencia en los términos de la ley de la materia”.

En ese tenor el planteamiento original consistía en que los Consejos de la Judicatura Local al forma parte de los Poderes Judiciales deben regularse respetando el principio de división de poderes sin dar lugar a condiciones de intromisión, dependencia y subordinación, en la inteligencia de que el sistema del Estado de Morelos trasciende al principio de división de poderes y la afectación a los principios de autonomía e independencia se da en vía de consecuencia.

Por otro lado, si se suprimen las porciones relativas al representante el artículo no se podría comprender, siendo

conveniente realizar una interpretación conforme sobre el alcance del término “representante”.

A las doce horas con cincuenta minutos el señor Ministro Presidente decretó un receso y la sesión se reanudó a las trece horas con quince minutos.

El señor Ministro Presidente precisó que siguiendo las intervenciones anteriores, valdría la pena dejar la propuesta de reconocimiento de validez de acuerdo con la interpretación conforme de las porciones normativas sustentada en el considerando relativo.

En ese orden, propuso agregar un punto resolutivo sobre la interpretación conforme de las porciones normativas del artículo 92 de la Constitución Política del Estado de Morelos que señalan “representante”.

Puesto a votación el proyecto modificado en cuanto propone reconocer la validez de los artículos 40, fracciones XXXV y XXXVII; 89 y 92, párrafo segundo, de la Constitución del Estado de Morelos, así como la interpretación conforme de sus porciones normativas que indican “representante”, fue aprobado por unanimidad de votos de los señores Ministros.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia sometió a la estimación del Tribunal Pleno el Considerando Séptimo “IV. Posibilidad de remoción de los representantes de los

Poderes Ejecutivo y Legislativo, en el Consejo de la Judicatura” (páginas de la trescientos treinta a la trescientos treinta y dos), en cuanto sustentan la propuesta contenida en el punto resolutivo Cuarto de declarar la invalidez del artículo 92, párrafo quinto, de la Constitución del Estado de Morelos, al establecer que los representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo podrán ser removidos libremente y en cualquier momento por quien los designó, constituye una intromisión de un poder a otro proscrita por el artículo 116 de la Constitución Federal.

El señor Ministro Gudiño Pelayo señaló que aplicará la misma argumentación realizada en el tema anterior, tal como lo sugirió el señor Ministro Cossío Díaz, a su vez el señor Ministro Azuela Güitrón recordó que también se agregarían las propuestas del señor Ministro Aguirre Anguiano, lo que se aceptó por el señor Ministro ponente.

Puesto a votación el proyecto en cuanto propone declarar la invalidez del artículo 92, párrafo quinto, de la Constitución del Estado de Morelos, se aprobó por unanimidad de votos de los señores Ministros.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia sometió a la estimación del Tribunal Pleno el Considerando Séptimo “V. Conformación temporal del Consejo de la Judicatura por seis miembros” (páginas de la trescientos treinta y dos a la trescientos treinta y cuatro), en el que se propone que es

Sesión Pública Núm. 74

Jueves 2 de julio de 2009

inconstitucional el artículo 92 de la Constitución Local, toda vez que al modificar la forma de integración del Consejo de la Judicatura Estatal para funcionar con seis miembros en lugar de cinco, viola el principio de división de poderes.

El señor Ministro Gudiño Pelayo precisó los argumentos que sustentan la propuesta del proyecto y agregó no compartir la propuesta al tratarse de un precepto transitorio que también tiene rango constitucional.

El señor Ministro Presidente señaló compartir la propuesta definitiva del señor Ministro ponente ya que la declaración de invalidez originalmente propuesta podría generar una situación inconstitucional. Para tal fin indicó que la intención del constituyente local fue no afectar los derechos adquiridos por el Consejero designado como representante de las Universidades Estatales, aunado a que no advirtió problema alguno por el hecho de que el órgano se integrara por seis miembros.

La señora Ministra Luna Ramos se manifestó de acuerdo con la nueva propuesta, ya que el comparativo respectivo debe realizarse conforme a una norma superior y no entre normas constitucionales locales, aunado a que el hecho de que sea un número par de integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos no afecta en el caso concreto al estar solucionado por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos la cual indica en su artículo

116 que en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

El señor Ministro Azuela Güitrón también se manifestó de acuerdo con la nueva propuesta.

El señor Ministro Franco González Salas precisó que está de acuerdo con el proyecto pero únicamente manifestó separarse de la consideración consistente en que las constituciones locales no pueden eventualmente limitar los cargos ya que los Estados tienen un ámbito soberano conforme al cual pueden actuar y en tanto no violenten una norma de la Constitución Federal, sí pueden tomar determinadas decisiones dentro del ámbito de su competencia, por lo que lo aceptó como criterio general, mas no como criterio absoluto.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia indicó que no pretende se agregue al engrose el argumento mencionado por el señor Ministro Franco González Salas.

El señor Ministro Góngora Pimentel manifestó que aún falta por responder la consecuencia de que no exista mayoría de integrantes del Consejo que provengan del Poder Judicial del Estado de Morelos.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia señaló que tal situación puede resolverse considerando que los

Sesión Pública Núm. 74

Jueves 2 de julio de 2009

Consejeros provenientes del Poder Judicial serán mayoría en todo caso, incluso cuando haya empate, en virtud del voto de calidad que asiste al Presidente del propio Consejo, quien proviene de ese mismo Poder.

Por su parte, la señora Ministra Luna Ramos sostuvo que el numeral impugnado prevé que debe preservarse la mayoría de los integrantes del Poder Judicial en relación con los provenientes de los otros dos Poderes, sin referirse a una mayoría, sin menoscabo de que en caso de empate, el Presidente contará con voto de calidad.

El señor Ministro Azuela Güitrón indicó que la Constitución General no requiere que exista mayoría de integrantes provenientes del Poder Judicial respectivo.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia recordó que al resolver la controversia constitucional 32/2007 se sostuvo que en la integración de los Poderes Judiciales Locales deben ser mayoría los integrantes que provengan de esos Poderes.

Puesto a votación económica el proyecto modificado en el sentido de reconocer la validez del artículo Quinto Transitorio de la Constitución del Estado de Morelos, se aprobó por unanimidad de votos de los señores Ministros.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia sometió a la estimación del Tribunal Pleno el Considerando Séptimo “VI. Violación al principio de división de poderes, derivada de nueva forma de designación de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia” (páginas de la trescientos treinta y cuatro a la trescientos cuarenta y uno), en cuanto se estima que son infundados los conceptos de invalidez relativos a que el Poder Legislativo demandado con las reformas, adiciones y derogaciones que aprobó en el Decreto que se impugna asume una posición totalitaria en la integración del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos al reservarse como de su exclusiva competencia la integración de las ternas para la designación de magistrados de dicho tribunal, el nombramiento de éstos, su evaluación y ratificación, excluyendo al Poder Judicial local.

El señor Ministro Gudiño Pelayo precisó los argumentos que sustentan la propuesta del proyecto, visibles en las fojas de la trescientos treinta y cuatro a la trescientos cuarenta y uno del proyecto.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia agregó que debía analizarse la reducción del plazo de duración de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, lo que implica la reducción del plazo como Consejero de la Judicatura, situación que afecta sus derechos adquiridos.

El señor Ministro Cossío Díaz agregó que a fojas trescientos treinta y cuatro del proyecto se sostiene que “En el décimo segundo concepto de invalidez, el actor sostiene sustancialmente que el Poder Legislativo demandó con las reformas, adiciones y derogaciones que aprobó en el Decreto que se impugna, asume una posición totalitaria en la integración del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, al reservarse como de su exclusiva competencia la integración de ternas para la designación de los magistrados de dicho Tribunal. El nombramiento de éstos, su evaluación y ratificación, excluyendo de estas actividades cualquier participación del Poder Judicial local en posición de subordinación al Poder Legislativo dependiente de éste en su integración”.

El señor Ministro Góngora Pimentel señaló la conveniencia de cuestionar si la atribución del Congreso del Estado prevista en el artículo 40, fracción XXXVII, en relación con el 89, décimo párrafo, de la Constitución del Estado de Morelos, es inconstitucional al permitir que un Poder pueda decidir sobre la integración de otro, toda vez que los únicos parámetros para equilibrar tal determinación se sostienen en el requisito de la votación por mayoría calificada del Congreso y la valoración de un dictamen técnico requerido al Consejo de la Judicatura local como un elemento más entre todos los que establezca del Congreso.

Al respecto citó el contenido del párrafo décimo del artículo 89 de la Constitución Local, el cual señala: “El Congreso del Estado, conforme a sus facultades decide libre y soberanamente sobre la designación de los magistrados, mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados integrantes de la Legislatura. Si el Congreso resuelve que no procede la designación para un nuevo período, el magistrado cesará en sus funciones, a la conclusión del período para el cual fue nombrado”, de lo que deriva que la redacción normativa reconoce que el Congreso local cuenta con facultades libres y soberanas para la designación y ratificación de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

Por otro lado, consideró que al señalarse en la Constitución Local impugnada que la designación será soberana se puede estimar que ello es inconstitucional, como se sostuvo al resolver la controversia constitucional 32/2007, en la cual se sostuvo: “El término “soberanamente” contenido en el párrafo segundo, califica al tipo de decisión que debe tomar el Congreso local. Así, la expresión “decisión soberana”, en su sentido literal, se entiende como una decisión absoluta, suprema, tomada por un solo órgano, el Congreso del Estado, e independiente de cualquier otro factor. En efecto, el sentido semántico de la expresión implica que el Congreso del Estado de Baja California, puede nombrar, ratificar o remover a los magistrados, sin tomar en cuenta a ningún otro ente, en ningún momento del

Sesión Pública Núm. 74

Jueves 2 de julio de 2009

proceso correspondiente, puesto que la decisión sería absoluta”.

Agregó que en este precedente la referida porción normativa fue declarada inconstitucional, debiendo destacarse que en el caso concreto la facultad relativa aparentemente sí se ejerce de manera libre y soberana, debiendo considerarse que el Congreso del Estado debe ejercer su atribución debidamente fundada y motivada.

En ese tenor, se manifestó a favor del proyecto salvo por lo que se refiere a la porción normativa del artículo 89 impugnado en cuanto menciona que la atribución respectiva se ejercerá de manera libre y soberana, la que propone se declare inválida.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia recordó que podría suplirse la deficiencia de la queja para declarar la invalidez de la porción normativa señalada por el señor Ministro Góngora Pimentel.

A su vez, el señor Ministro Azuela Güitrón solicitó que al estudio respectivo se agregue el artículo 17 constitucional ya que elimina la posibilidad de que los magistrados soberanamente puedan ser removidos, sino que deberá hacerse mediante un sistema que garantice su independencia.

Sesión Pública Núm. 74

Jueves 2 de julio de 2009

El señor Ministro Gudiño Pelayo aceptó las referidas sugerencias.

El señor Ministro Cossío Díaz propuso que del análisis del sistema se sostendría que este debe tender a garantizar la independencia del Poder Judicial, por lo que estimó más técnico extender el efecto de la anulación que suplir una deficiencia de queja.

El señor Ministro Franco González Salas señaló no comprender en qué términos la invalidez que se propone deriva de lo analizado previamente, por lo que en todo caso, en el futuro, se podría dar la razón al que impugne una aplicación incorrecta del precepto respectivo.

El señor Ministro Gudiño Pelayo manifestó estar de acuerdo con las propuestas del señor Ministro Cossío Díaz precisando que en el proyecto se determinaría en principio que no es inválido el hecho de que a los Magistrados los designe el Congreso agregando que la única invalidez es la de la porción normativa antes referida.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia propuso que se votara la resolución del concepto de invalidez planteado antes de continuar con el siguiente punto.

Puesto a votación económica el proyecto en cuanto propone reconocer la validez de los artículos 40, fracción

Sesión Pública Núm. 74

Jueves 2 de julio de 2009

XXXVII y 89 de la Constitución del Estado de Morelos, sin considerar la porción normativa del párrafo décimo que indica “libre y soberanamente”; se aprobó por unanimidad de votos de los señores Ministros.

El señor Ministro Franco González Salas solicitó al señor Ministro ponente Gudiño Pelayo la posibilidad de presentar para la siguiente sesión la argumentación relativa a la suplencia de la queja para asumir una posición respecto al tema.

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia propuso que se hiciera referencia a los precedentes que han determinado que en suplencia de queja se pueden incorporar actos no reclamados a la controversia constitucional.

La señora Ministra Luna Ramos estimó que se reclama el artículo 89 de la Constitución local en su totalidad por lo que, sin mayor problema, se puede suplir la deficiencia de queja, lo que fue motivo de declaratoria de inconstitucionalidad de la Controversia Constitucional 32/2007.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas recordó que quedó firme en lo que se refiere a la validez.

Sesión Pública Núm. 74

Jueves 2 de julio de 2009

El señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia precisó que únicamente se declaró infundado el respectivo concepto de invalidez.

El señor Ministro ponente Gudiño Pelayo manifestó que prepararía para la próxima sesión un avance del artículo 50 impugnado que se sobreseyó.

El señor Ministro Presidente precisó que el asunto y los demás continúen en lista.

Siendo las catorce horas con cinco minutos el señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia convocó a los señores Ministros para la Sesión Pública que se celebrará el lunes seis de julio de dos mil nueve, a partir de las once, y levantó esta sesión.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, que da fe.

RCC'MOKM